

## México entra en zona de presión política y diplomática

La política mexicana atraviesa uno de sus momentos más delicados del año. Las acusaciones realizadas desde Estados Unidos contra personajes ligados al poder político en Sinaloa encendieron una confrontación que ya no sólo se limita al terreno judicial, sino que ahora impacta directamente la relación bilateral, la estabilidad política y la narrativa pública rumbo a los próximos procesos electorales.

El tema escaló después de que autoridades estadounidenses señalaran posibles vínculos entre actores políticos mexicanos y organizaciones criminales. La presión aumentó cuando el presidente Donald Trump lanzó nuevas advertencias contra los cárteles y aseguró que, si México “no hace el trabajo”, Estados Unidos actuará por cuenta propia. Aunque el gobierno mexicano respondió exigiendo pruebas y defendiendo la soberanía nacional, el mensaje de Washington dejó claro que el tema seguirá creciendo en las próximas semanas.

En el Senado y en la Cámara de Diputados el ambiente también se tensó. La oposición aprovechó la ausencia del senador Enrique Inzunza en la Comisión Permanente para reforzar el discurso de presunta protección política, mientras Morena intentó cerrar filas y denunciar una estrategia de desestabilización impulsada desde el extranjero. El PRI incluso llevó el conflicto a un nuevo nivel al solicitar ante instancias estadounidenses que se investigue a Morena por posibles vínculos con el crimen organizado, algo que el partido guinda calificó como un acto irresponsable y entreguista.

La crisis en Sinaloa ya comenzó a generar preocupación fuera del ámbito político. Analistas y operadores financieros observan con atención el impacto que esta situación podría tener en la confianza institucional y en la percepción económica del estado. El temor principal es que la incertidumbre termine afectando inversiones, financiamiento y estabilidad regional, especialmente en un momento donde la seguridad pública continúa siendo uno de los temas más sensibles del país.

Mientras tanto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación recibió un conflicto que podría marcar precedente en materia laboral: la huelga del Nacional Monte de Piedad. El caso se convirtió en un símbolo del choque entre sindicatos, trabajadores y autoridades judiciales. Lo que originalmente parecía un conflicto interno ahora representa una discusión nacional sobre el alcance del derecho de huelga, la negociación colectiva y los límites de la intervención institucional en disputas laborales.

En otro frente, el Instituto Mexicano del Seguro Social comenzó a mover una agenda distinta, enfocada en modernizar la infraestructura hospitalaria frente al cambio climático. El director general del IMSS, Zoé Robledo, advirtió que muchos hospitales fueron construidos bajo condiciones completamente diferentes a las actuales y que hoy enfrentan riesgos operativos derivados de temperaturas extremas, fenómenos naturales y problemas de abastecimiento de agua y energía.

La propuesta busca fortalecer el modelo de “hospitales verdes y resilientes”, un concepto que incluye ahorro energético, mejor manejo del agua y capacidad de respuesta ante emergencias. Aunque para muchos puede sonar técnico, en realidad el tema toca directamente la vida diaria de millones de derechohabientes, pues cualquier falla operativa en hospitales termina impactando atención médica, cirugías, urgencias y servicios básicos.

En medio de este clima político y social, también aparecieron señales de desgaste económico. La inversión fija bruta acumuló 18 meses consecutivos de contracción y el consumo interno muestra señales de desaceleración. Aun así, sectores como la industria automotriz mantienen números positivos y lograron cifras históricas de ventas durante abril, impulsadas por estabilidad en precios y recuperación parcial del mercado.

A nivel internacional, México también inició una intensa agenda comercial en Canadá encabezada por Marcelo Ebrard y una delegación de empresarios mexicanos. El objetivo es fortalecer relaciones económicas rumbo a la revisión del T-MEC y consolidar a México como socio estratégico en América del Norte, especialmente en un contexto donde Estados Unidos busca reducir dependencia comercial de China.

El país entra así en una etapa donde política, seguridad, economía y relaciones internacionales comienzan a mezclarse peligrosamente. La presión externa crece, los conflictos internos se profundizan y el margen de error político se reduce. En este escenario, el verdadero desafío para el gobierno no será únicamente responder al discurso de Washington, sino demostrar capacidad institucional para sostener estabilidad, confianza y gobernabilidad en medio de uno de los entornos más complejos de los últimos años.